

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El anteproyecto objeto de informe tiene como principal finalidad la de recuperar la asimilación legal a los efectos de las medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que estableció la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, para los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, con las personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como establecer expresamente la asimilación legal a los efectos laborales, aclarándose de esta forma su extensión, y corrigiendo las situaciones originadas tras las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2018 (recursos 239/2018, 3382/2016 y 1826/2017), de modo que tanto los citados pensionistas como las empresas que los contraten vuelvan a poder ser beneficiarios de las medidas de fomento del empleo, tanto en el empleo ordinario como en el protegido.

Asimismo, se procede a introducir una serie de mejoras en el texto con el fin de incrementar su eficacia y actualizar sus disposiciones. Entre las modificaciones que se plantean se encuentran la eliminación del texto de las referencias normativas derogadas, sustituyéndolas por las hoy vigentes, la actualización en la denominación de los órganos superiores y directivos responsables de la aplicación de la norma, la determinación de un plazo específico para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que hasta ahora se venían rigiendo por los plazos genéricos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la llamada a los poderes públicos para que promuevan la prohibición de las actuaciones que denigren a las personas con discapacidad y el destino

de los importes ingresados en aplicación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley a actuaciones de mejora de la accesibilidad.

No obstante, en el momento de la emisión del presente informe, muchas de las modificaciones citadas se han introducido en el texto de la norma tras la modificación efectuada por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

Esta Agencia tuvo la oportunidad de emitir el preceptivo informe sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que ahora se modifica. De este modo, en el Informe 134/2013, ya se ponía de relieve que la mayor parte de las medidas previstas en el Proyecto implicarían el tratamiento de datos de carácter personal, que en muchos casos se referiría a las propias personas discapacitadas y, en particular a su tipo, grado y condiciones de discapacidad y que esta información debía de ser considerada como dato de carácter personal relacionado con la salud de las personas con discapacidad, realizándose las observaciones oportunas que fueron incorporadas al texto de la norma.

En el presente momento, lo único que se pretende con la reforma proyectada, en cuanto a la protección de datos personales se refiere, es la adaptación de las referencias legales contenidas en la misma a la nueva normativa aplicable. A estos efectos, se modifican las referencias contenidas en el artículo 92 sobre publicidad de las resoluciones sancionadoras, en el artículo 104, sobre información a otros órganos y en la disposición adicional segunda referente al tratamiento de la información.

A este respecto, lo primero que se debe destacar es que la normativa aplicable está constituida, en primer término, por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) que goza de efecto directo y contiene la normativa general aplicable a los tratamientos de datos de carácter personal, mientras que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), complementa al RGPD en aquellos aspectos expresamente previsto en el mismo.

**Por lo tanto, debe alterarse el orden en el que se citan las normas en materia de protección de datos personales, de modo que el RGPD se cite en primer término y, a continuación, la LOPDGDD.**

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el RGPD ha introducido importantes novedades en el régimen jurídico aplicable a la protección de datos personales, singularmente a través de la introducción del principio de responsabilidad proactiva, lo que deberá tenerse en cuenta por los responsables del tratamiento y, en su caso, por los encargados del tratamiento.